

La sombra de Mancera en Ecopetrol y en el apartamento 901 que tiene en líos a R. Roa

Hay tres jugosos contratos ligados al poderoso expolicía. Roa, quien será imputado en marzo, dice que desvirtuará señalamientos en caso de apartamento y de campaña Petro.



UNIDAD
INVESTIGATIVA

U.INVESTIGATIVA@ELTIEMPO.COM

✉ @UninvestigativaET

Aunque públicamente continúan guardando silencio, los miembros de la junta directiva de la estatal Ecopetrol tienen una sesión privada este miércoles en la que van a abordar la situación judicial de la cabeza de la compañía, Ricardo Roa, llamado esta semana a una doble imputación de cargos por la Fiscalía General.

Financieramente, la preocupación es que la estatal sigue registrando un desplome histórico de sus utilidades. Pero, penalmente, el tema se concentra en que el 11 y el 12 de marzo próximos, Roa irá a juzgados a responder por los delitos de tráfico de influencias y celebración de contratos sin requisitos legales, por la compra de su apartamento (revelada por EL TIEMPO); y violación de topes electorales, en su rol de gerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.

El rastro de Mancera

En el tema de la campaña Petro Presidente, el grueso probatorio está en el expediente administrativo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que encontró mérito para compulsar copias al ente acusador contra Roa tras probar que se sobrepasaron los máximos legales en más de 5.300 millones de pesos, sumadas ambas vueltas.

En este capítulo se habla desde fraude procesal, hasta financiación con fuentes prohibidas, además de la violación de topes.

Y en otro caso, este diario estableció que las dudas sobre la conducta de Roa están ligadas a la sombra de un exconcorde de la Policía que aparece tanto en la compra de su apartamento, ubicado en el norte de Bogotá, como en jugosos contratos con la estatal petrolera.

Se trata de Juan Guillermo Mancera, ex jefe de seguridad de Pacific Rubiales quien se convirtió en empresario del sector de hidrocarburos. El exconcorde cobró notoriedad en mayo de 2024, cuando EL TIEMPO lo llamó para que explicara su nexos con la avioneta que fue usada para transportar cocaína, incautada en el aeropuerto de Providencia. Los dueños del aparato resultaron ajenos al ilícito y Mancera dijo que fue un negocio de palabra



Ricardo Roa, cabeza de la estatal petrolera, ha sido enfático ante la junta y el país en que la compra del apartamento fue transparente, así como su rol en la campaña Petro y en el Grupo Ecopetrol. FOTO: EL TIEMPO



Juan Guillermo Mancera dice que regresará al país para afrontar su proceso.

gas y petróleo Serafino Iacono, ex-Pacific Rubiales.

El 6 de junio de 2025, este diario publicó que Innova Mercadeo y Logística SAS, vinculada a Mancera, hizo 4 transferencias y 2 consignaciones para pagar el apartamento que Roa adquirió en diciembre de 2022, antes de llegar a Ecopetrol. Los pagos fueron entre marzo de 2023 y febrero de 2024, cuando firmas vinculadas a Mancera buscaban negocios en la estatal.

Contratos bajo la lupa

Uno de los contratos que se chequean fue suscrito en 2023 con Plus + Energy SAS, en donde Mancera es accionista.

"Si bien esa empresa es cliente activo en combustibles refinados desde 2021, se indaga si una sobrina de Mancera, empleada de Ecopetrol, hizo algún tipo de gestión", explicó un investigador.

Se verifica si Plus + Energy SAS adquirió certificados de compensación con Ecopetrol, operación que le habría permitido acceder a beneficios tributarios. El tema

está relacionado con la suscripción de un contrato spot de compraventa de créditos de carbono entre 2023 y marzo de 2024.

Otro contrato bajo la lupa es para el suministro de gas a la refinería de Barrancabermeja. Es del 7 de diciembre de 2023, con vigencia hasta el 3 de noviembre de 2026, con Plus + ESP de Gas SAS, de la que Mancera es controlante.

Los negocios fallidos

La indagación más adelantada, sin embargo, es la que tiene que ver con un contrato fallido entre una empresa ligada a Mancera y una filial de Ecopetrol: Hocol.

Después de que EL TIEMPO reveló el nexo de Mancera con el apartamento, el medio colega La Silla Vacía publicó que se le iba a dar un jugoso negocio a Gaxi, una firma en la que aparecía el expolicía. Hablaban de un proyecto de acuerdo para implementar y operar un barco regasificador, que podía generar millonarios ingresos.

En marzo de 2025, Germán Montes, entonces líder de Nuevos Nego-

cios de Hocol, firmó una certificación en la que especificó: "Se ha celebrado un acuerdo con Gaxi S. A. ESP", cuyo "propósito es estructurar y desarrollar la importación de gas natural licuado que proporcione una unidad flotante de almacenamiento y regasificación para suministrar gas natural".

Ecopetrol salió a negar que directivos cercanos a Roa hubieran instruido, sugerido o solicitado a Hocol adelantar esa gestión. Además, que nunca se concretó.

Pero fuentes de la Fiscalía explicaron que para que se configure un tráfico de influencias no es necesario que el asunto se concrete. Y recordaron el reciente caso del general Rodolfo Palomino, condenado a 7 años de cárcel por decirle a una fiscal que contemplara dejar pendiente una captura.

Y hay otro contrato fallido vinculado a Mancera, que tenía como objeto el servicio de vigilancia y seguridad privada para el grupo Ecopetrol a través de Fidelity Security Company Ltda., de la que el expolicía es accionista. Luego de que se prendieron las alarmas y de un correo, no se lo adjudicaron.

El oficio y la defensa

A través de Juan David León, su apoderado, Ricardo Roa ha sido enfático en que su conducta está apegada a la ley; en que tiene elementos probatorios para desvirtuar los señalamientos tanto en el caso de la violación de topes y de los contratos como en el de la compra de su apartamento, donde ya rindió interrogatorio.

De hecho, entregó una trazabilidad financiera con la que buscan demostrar que el dinero con el que se pagó el inmueble provino de fondos propios y hasta de préstamos bancarios.

Además, el penalista León es enfático en que la presunción de inocencia de su cliente está intacta.

Pero el gobierno corporativo de Ecopetrol obliga a evaluar estos escenarios desde el punto de vista reputacional y el impacto ante los donadores de Estados Unidos, en donde la estatal cotiza en la sensible Bolsa de Nueva York.

En cuanto a Mancera, EL TIEMPO estableció que su apoderado, el exfiscal Mario Iguarán, radició un oficio en el cual asegura que su cliente regresará de inmediato al país para aclarar cualquier duda sobre la compra del apartamento y los contratos con la estatal.

Mancera y la cabeza dicho a este diario que su sobrina entró a la compañía por canales estrictos y antes de que llegara Roa y que no recuerda que estuviera en ningún trámite de sus contratos. Además, que luego del tema del apartamento, decidió apartarse de cualquier contratación con la estatal.

En todo caso, hay un proceso paralelo al de Roa en donde se indaga su conducta y la de otros posibles implicados.

La acumulación de procesos contra alfiles del presidente Petro por casos de corrupción

CONFIRMAN ORDEN DE CAPTURA CONTRA CARLOS R. GONZÁLEZ, ROA FUE LLAMADO A DOBLE IMPUTACIÓN Y AVANZAN CASOS DE UNGRD, SALUD Y JULIANA GUERRERO.

A menos de cinco meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro, varios de los escándalos que han rodeado su mandato empezaron a concretarse en decisiones judiciales.

En efecto, la justicia no solo está tocando penalmente a varios de sus hombres y mujeres de confianza sino que, además, está impactando asuntos del resorte más íntimo del mandatario, como su propia campaña a la Presidencia, y a una de sus candidatas a viceministra: Juliana Guerrero. También, banderas de su gobierno, incluida la del revólver de la salud y la chequera pública para hacer frente a los desastres naturales.

Hacían tan solo 48 horas, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura en contra de Carlos Ramón González, exmiembro del M-19 y uno de los hombres más cercanos al mandatario.

Aunque hay hasta una solicitud de investigación para una supuesta laxitud en su caso, la ex

cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), González, pasó de ser un poderoso y millonario político de izquierda a prófugo de la justicia. Y ya carga a costas una imputación por lavado de activos, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer, por su rol como el presunto cerebro del saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Bonilla, Velasco y Leyva

Hasta la semana pasada, González y los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco eran los funcionarios de más alto rango del gobierno involucrados en conductas penales.

A estos dos últimos —que permanecen presos en guarinios militares por el mismo caso de la UNGRD— les notificaron a mitad de semana que la magistrada Alma Chamat estudiará el recurso de apelación que inter-



"(Bonilla y Velasco) en desarrollo de un pacto criminal ofrecieron y acordaron con congresistas desarrollar contratos o convenios a cambio de su votación en las sesiones del Congreso".

pusieron sus apoderados para defenderse en libertad, por presuntamente haber conformado un acuerdo criminal para ofrecer contratos a congresistas a cambio de sus votos a proyectos del Ejecutivo. Ambos deberán responder por concierto para

delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebito en la celebración de contratos.

A la lista, por rango, solo se le sumaba el excancelier Álvaro Leyva, encartado judicialmente por el turbio manejo de los contratos de pasaportes, un caso que sigue bajo investigación.

Roa, Benedetti y Guerrero

De otro lado, la doble imputación a la que acaba de ser citada la cabeza de Ecopetrol, Ricardo Roa —por la violación de topes de la campaña Petro Presidente 2022-2026 y por la compra de un apartamento, revelada por EL TIEMPO— tiene un doble efecto. Este caso no solo impacta a Roa, sino que pone en entredicho la legalidad de parte de los fondos de la campaña que llevó al mandatario a la Casa de Nariño.

La Fiscalía venía adelantando la investigación a buen ritmo en tiempos de Francisco Barbosa. Y tomó más impulso luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) compulsó copias al ente acusador tras encontrar inconsistencias por más de 5.300 millones de pesos.

Y aún hay otra línea de investigación que avanza, por los famosos chats entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, en la que el hoy ministro del Interior habla de 15.000 millones de barras (pesos) que consiguió para ganar las elecciones. Benedetti tiene otros casos pendientes en

la Corte, uno en etapa de juicio: el de Fonade.

El otro anuncio judicial de esta semana fue la citación a imputación a Juliana Guerrero, una joven que ascendió rápidamente en el Gobierno e iba para viceministra de la Juventud, hasta que la frenó su título profesional falso.

Los otros y la salud

Y no menos importantes, en la lista de alfiles procesados aparecen Sandra Ortiz, la exconcejera para las Regiones, recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía como presunta emisaria en la entrega de 4.000 millones de pesos de la UNGRD a Van Name y Andrés Calle, cabezas en su momento de Senado y Cámara, respectivamente.

También figura el prófugo número dos, César Manrique, otro ex-M-19, a quien señalan de apropiación de 2.000 millones de pesos de la UNGRD.

Y en este caso sobresale el exasesor del Dapre, Jaime Ramírez Cobo, cuyo nombre también figura en otro escándalo del que ha hablado el propio Petro y en donde estarían involucrados otros de sus alfiles, es turbio nombramiento de interventores de EPS que terminaron reventando el sistema.

Es inminente que la justicia también proceda en ese asunto antes del 7 de agosto.

@UninvestigativaET